

## Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)\*



### Colombia (CC):

- **Corte Constitucional ordena expedir protocolo para tramitar visitas íntimas de privados de la libertad sin distinción de orientación sexual o identidad de género diversas.** La Corte Constitucional otorgó dos meses a la cárcel de Acacías (Meta), a la Dirección Regional Central del INPEC, a la Dirección General del INPEC y al Ministerio de Justicia para que expidan un protocolo que permita la atención y trámite de las solicitudes de visita íntima presentadas por la población privada de la libertad sin distinción por su orientación sexual o identidad de género diversas. La orden fue adoptada al fallar una tutela a favor de una persona que estaba interna en la cárcel de Acacías, quien solicitó su traslado a Bogotá para la visita íntima de su compañera recluida en la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, su solicitud no fue atendida. Pese a que se declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, puesto que la accionante quedó en libertad, la Corte consideró que procedía emitir un pronunciamiento de fondo por la importancia del caso. La Sala Sexta de Revisión, con ponencia del magistrado Hernán Correa Cardozo, señaló que a la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se autorreconoció como miembro de la población LGBTQIA+ y tenía registrado en el sistema a un hombre como su cónyuge. Según el Alto Tribunal, ese requisito no está contemplado en la regulación, por lo que esa medida constituye un trato diferenciado con ocasión de la orientación sexual o identidad de género diversas que carece de justificación suficiente desde el punto de vista constitucional. Además, se afectó su derecho a la intimidad porque se vio obligada a publicitar su orientación sexual. “La situación de la demandante no era un asunto aislado. Por el contrario, responde a una problemática estructural en materia de visitas íntimas de la población LGBTQIA+. Las autoridades han adelantado labores de gestión para garantizar este derecho. En todo caso, no han precisado actuaciones articuladas que permitan impactar de manera efectiva el goce de los derechos fundamentales de esta población”, indicó la sentencia. También se evidenció que la afectación a los derechos de la accionante no solo es atribuible a la cárcel de Acacías, sino que también es responsabilidad de las direcciones regional central y general del INPEC y del Ministerio de Justicia porque tenían el deber de vigilar que el establecimiento penitenciario implementara las normas y políticas expedidas para proteger el derecho a la visita íntima de la población LGBTQIA+. Además de la orden para la expedición de un protocolo de atención y trámite de las solicitudes de visita íntima presentadas por la población privada de la libertad (PPL), el fallo profirió once órdenes más, entre las que se encuentran: La cárcel de Acacías deberá ofrecer disculpas privadas y por escrito a la accionante por haber obstaculizado su acceso a la visita íntima en condiciones de dignidad, igualdad e intimidad. Además, tendrá que

abstenerse de imponer barreras administrativas para tramitar las solicitudes de acceso a la visita íntima de las PPL. La cárcel de Acacias, el INPEC y el Ministerio de Justicia tendrán seis meses para capacitar a todos los funcionarios y a la población privada de la libertad del establecimiento penitenciario en materia del derecho de la comunidad LGBTQIA+ de acceder a su visita íntima sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. El INPEC y el Ministerio de Justicia tendrán seis meses para expedir una directriz que, entre otras cosas, precise los objetivos concretos que pretende alcanzar la política pública en materia de acceso de la población LGBTQIA+ a la visita íntima.

### **Chile (Poder Judicial):**

- **Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que busca garantizar derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.** Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema —el viernes 28 de octubre recién pasado— analizó el contenido del proyecto de ley: “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Informe que fue remitido a la presidencia unida de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Mujer y Equidad de Género del Senado ayer, martes 8 de noviembre. La Corte Suprema valoró positivamente las ideas centrales del proyecto de ley; sin embargo, estimó necesario hacer algunas precisiones a la iniciativa legal. “Que a lo largo de este informe se han señalado los objetivos, fundamentos y contenido de la iniciativa en estudio, que dan cuenta de un esfuerzo de los legisladores de introducir a la regulación legal una serie de medidas que van en la línea de brindar una respuesta institucional, desde varios frentes de acción, a la violencia de género, en la mira de cumplir su objetivo principal, el cual es, responder a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de nuestra sociedad”, plantea el informe el pleno de ministros. El oficio agrega que: “Destacan, al respecto, las medidas que se proponen en relación al acceso a la justicia y el abordaje jurisdiccional de la violencia de género. Sobre ellas, en el documento se realizan numerosas observaciones, fundadas en diversos diagnósticos, estudios e investigaciones que se han difundido en los últimos años, generando un valioso acervo de experiencia, que unido a las bases teóricas que facilitan la comprensión del fenómeno de la violencia de género, buscan contribuir al robustecimiento de una propuesta que se estima imprescindible”. “En tal sentido, el articulado analizado viene a solucionar varias de las problemáticas que diversas instancias nacionales e internacionales, y el mismo Poder Judicial, han visibilizado en base a diagnósticos del funcionamiento del Estado en la materia y, en particular, del sistema de justicia. Por lo tanto, una primera consideración es que este proyecto de ley incorpora, por primera vez, una visión global e integral de las problemáticas que deben ser atendidas a efectos de prevenir, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia de género que afecta a las mujeres, pone el énfasis en los derechos de las mujeres y hace referencia a los principales instrumentos internacionales vinculantes en la materia. Consecuencia de ello, como se señalará, es que su aprobación generará impactos considerables para los órganos del Estado, en particular para el Poder Judicial, que es necesario visibilizar a fin de atenderlos adecuadamente”, sostiene la Corte Suprema. “En materia de acceso a la justicia en particular, el proyecto de ley constituye un avance al proponer normas para solucionar algunos de los nudos críticos que han sido levantados y que se han ido mencionando al abordar las diferentes normas proyectadas. Entre ellos la obligación de todos los órganos del Estado de atender adecuadamente a este tipo de causas, la obligación de brindar seguridad, protección y respeto a los derechos de las mujeres durante el proceso, la implementación de la necesaria coordinación interinstitucional e interna, un mejor sistema de notificación y el seguimiento efectivo a las medidas cautelares, accesorias y condiciones de la suspensión condicional, el aumento de las multas, entre otros”, añade. Dudas. No obstante los avances reconocidos, la Corte Suprema advierte que “persisten dudas en relación a la forma en que se van a solucionar algunas cuestiones, donde la incorporación de normativa específica habría sido relevante, así: **a) En materia de capacitación.** El articulado incluye entre los deberes del Estado adoptar medidas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia (artículo 8 indicación N° 21), indicando entre los objetivos de las medidas de prevención que deben implementar los órganos del Estado (artículo 9, indicación N° 27) lo siguiente ‘1. Incorporar en todas sus actuaciones el enfoque de género y de derechos humanos, para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres especialmente su derecho a una vida libre de violencia’; agregando en el artículo 10 (indicación N° 29), entre las medidas generales de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten, las siguientes: ‘5. Programas de sensibilización, capacitación y formación sobre derechos humanos de las mujeres, y erradicación de la violencia de género para el personal de los órganos del Estado, especialmente, de aquellos que interactúan con las víctimas’. **b) En materia de acceso a la justicia.** Por su parte, se propone en la indicación número 72 un nuevo artículo referido a las obligaciones generales de los órganos del Estado frente a las denuncias por hechos de violencia de género, indicando que en todas las indicaciones y en todos los procesos judiciales y administrativos se cumplirá

estrictamente con las siguientes obligaciones: debida diligencia y no revictimización, los cuales define. Ahora bien, no obstante el contenido de las normas indicadas, el Proyecto de ley no establece una normativa específica ni considera los recursos presupuestarios necesarios para incorporar la capacitación obligatoria de las operadoras y operadores judiciales, especialmente de quienes administran justicia, en materia de violencia de género. Si bien las obligaciones reseñadas y muchas otras a lo largo de la propuesta de articulado, establecen obligaciones concretas tanto para los órganos del Estado como para sus integrantes, el Proyecto de Ley no establece la obligatoriedad en la capacitación ni es acompañado de los recursos para ello. En consecuencia, atendidas las exigencias que la aprobación de este proyecto de ley generará para las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, y la necesidad de contar con los recursos para implementarlas, se estima indispensable que se introduzcan los ajustes en el Proyecto tendientes a salvar dicha situación. **c) En materia de registro de información.** En el artículo 10 (indicación N° 29), entre las medidas generales de prevención de la violencia de género que los órganos del Estado adopten, se establecen las siguientes: '6. Iniciativas de recopilación, análisis e intercambio de información sobre violencia de género que aporte a la prevención, detección temprana, gestión oportuna y reparación de los derechos de las mujeres, de conformidad con el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.' En las indicaciones del Presidente N° 64, 65 y 66 se establece la creación del Sistema Integrado de Información de Violencia de género, que ya fue objeto de análisis. Así las cosas, no obstante las normas referidas, el proyecto de ley no establece de manera obligatoria y expresa la necesidad de registro de la información de la víctima en los sistemas de registro de información de causas judiciales. Nuestro diagnóstico institucional interno y todo el intercambio de experiencias a nivel interinstitucional han relevado que existen resistencias culturales e inercias de la tramitación que no incentivan el registro adecuado de los datos, por lo cual, una obligación legal para los órganos del Estado en esta materia permitiría exigir a las instituciones contar con la información requerida. En la misma línea sería relevante que el proyecto explicita el rol institucional en la estandarización de la medición y explicita a su vez el alcance del funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de género, junto con reforzar las capacidades institucionales. **d) En relación a la dualidad del sistema, especialmente en causas de violencia intrafamiliar:** Una de las principales recomendaciones del estudio 'Acceso a la Justicia de mujeres víctimas de violencia usuarias del Poder Judicial', como se ha indicado, fue mejorar la coordinación interna entre tribunales de familia y de garantía y en lo referente a derivación de causas; ya que esta dualidad del sistema (en áreas de familia y penal) se constató que dificulta el acceso a la justicia de las mujeres dado que hay escasa interacción entre ambos sistemas. En la indicación 71 del Presidente, correspondiente al artículo 23, es posible observar que se mantiene la dualidad entre el sistema penal, para la violencia que constituya delito, y el resto de los sistemas para otros tipos de violencia. En la indicación 86, referida al artículo 32, se señala que los actos de violencia de los tribunales de familia serán conocidos por estos e indica las normas a las que se sujetaran (Ley N° 20.066 y Ley N° 19.968). El proyecto de ley, en materia de seguimiento de las medidas cautelares establece que el seguimiento de las medidas cautelares está a cargo del tribunal que las ordenó (artículo 36). Luego, respecto de las medidas decretadas en familia cuando el tribunal se declara incompetente, resuelve este problema entregando al tribunal de garantía la obligación de hacer el seguimiento a esas medidas cautelares (artículos 35 y 36). Posteriormente establece obligaciones expresas para el tribunal de garantía de hacer seguimiento a las medidas cautelares, accesorias y condiciones (artículo 46). Las indicaciones del Presidente solo hacen precisiones de forma a estos artículos. Ahora bien, en lo que refiere a otras temáticas propias del sistema de familia cuando la violencia intrafamiliar se encuentra siendo conocida en sede penal, el artículo 27 (indicación N° 78 del Presidente) que se encuentra en las disposiciones generales, párrafo I del Título III nuevo (Acceso a la Justicia...) mantiene entre las medidas cautelares especiales frente a situaciones de riesgo inminente de padecer violencia de género, la posibilidad para el tribunal competente de fijar alimentos provisorios y regular cuidado personal provisorio", desglosa. Para el máximo tribunal del país: "Así, la mantención de un sistema dual de conocimiento de la violencia de género, especialmente en el ámbito doméstico, continuará generando desafíos para el sistema pues existen riesgos ciertos para la seguridad y para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas, al no otorgarse un tratamiento integral en alguna sede (reconociendo que dicho tratamiento integral podría no ser posible de justificar en sede judicial en términos de número de ingresos y los recursos necesarios para atenderlos). Ahora bien, el establecimiento de obligaciones específicas de seguimiento de las medidas cautelares para los tribunales sin duda hará necesario implementar una coordinación, o hacerla más eficiente y expedita en los casos en que ya exista, entre los tribunales de familia y los tribunales con competencia en materia penal, en los casos de violencia intrafamiliar en que el tribunal con competencia en materia de familia se declara incompetente por verificar la existencia de un delito. Respecto de otras materias, sin embargo, sobre todo aquellas relacionadas con el sistema de familia que podrían resolver de manera provisoria otras competencias, deberán explorarse, en términos

de implementación, sistemas de gestión de causas que permitieran a dichos tribunales contar con mayores antecedentes y recursos para la toma de estas decisiones. Es, pues, una cuestión que ha de ser tenida en cuenta en relación a los desafíos que para el Poder Judicial incorpora esta nueva normativa y que se facilitaría de contar con mayores recursos”, advierte. “Finalmente, hay algunos aspectos de preocupación específica para el Poder Judicial, que consideramos relevante tener en consideración: A. En relación a la eventual responsabilidad del Poder Judicial y de sus integrantes, por no cumplir las obligaciones derivadas de las normas contenidas en el Proyecto de Ley en comento. El inciso segundo del artículo 3° de la indicación N° 9 del Presidente, posterior a la definición de violencia de género, dice lo siguiente: ‘La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según correspondan al órgano respectivo, a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes.’ Posteriormente el número 6 del artículo 4° de la indicación N° 13 del Presidente, define violencia institucional como: ‘toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente. Para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes, solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y, como consecuencia de ello, ocasionaren un daño por falta de servicio.’ Adicionalmente se establecen obligaciones para el Estado y los órganos del Estado en los artículos 8 (indicación N° 21) y 10 (indicación N° 29) entre otros. Si bien las normas enunciadas, y algunas otras, son relevantes para visibilizar la responsabilidad del Estado y la responsabilidad funcionaria en garantizar la protección y seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, es necesario reconocer que en términos generales las exigencias que la aprobación de este proyecto de ley generarán para las instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, hace muy necesario contar con los recursos para implementarlas. B. En relación a la participación del Poder Judicial en la Comisión Interinstitucional que la ley crea: Las indicaciones N° 61 y 62 del Presidente de la República, establecen la creación de la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género en la que participa el Poder Judicial. Entre las funciones que se le atribuyen, además de la coordinación e intercambio de información, se le entrega la facultad de aprobar el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus modificaciones y conocer el avance en su cumplimiento y evaluación. La indicación N° 63 del Presidente de la República establece los objetivos, características y modo de aprobación del Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, que debe aprobar dicha Comisión. Ahora bien, la coordinación interinstitucional es esencial para otorgar seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia, por lo tanto la creación de esta Comisión y la elaboración del Plan de Acción son positivos”. “Sin embargo, es necesario tener en consideración al menos tres cuestiones: 1. Evaluar el rol que tendrá el Poder Judicial en esta Comisión, considerando su autonomía como Poder del Estado. Las experiencias derivadas de las Comisiones creadas por la Ley N° 21.378 (de monitoreo telemático) y 21.389 (de registro de deudores de alimentos) revelan, por un lado, la necesidad de actuación de una de las más altas autoridades de la institución en estos espacios (para permitir una adecuada coordinación interna) y la excesiva carga de trabajo que ello implica para quienes participan. 2. Por otro lado, es necesario, resolver la forma en que el Poder Judicial va a participar en las decisiones de esta Comisión y resolver el tipo de obligaciones que va a poder asumir en un Plan de Acción de las características enunciadas, por las mismas razones derivadas de su autonomía constitucional y por su forma de funcionamiento interna. 3. Finalmente, parece adecuado plantear lo que significa para el Poder Judicial participar en multiplicidad de Comisiones, muestra de lo cual son los ejemplos de las leyes antes señaladas”, concluye.

### **Perú (La Ley):**

- **¿El contenido de los correos electrónicos institucionales de los ministros de Estado es información pública?** El Tribunal Constitucional resolvió un interesante caso sobre el Expediente 04792-2017-PHD/TC en torno a un pedido de acceso a la información pública. En concreto, el demandante pidió los correos electrónicos recibidos por el entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, junto a sus respectivas respuestas, es decir, correos recibidos y enviados. En su demanda precisó que buscaba obtener el acceso a todas esas comunicaciones electrónicas en cuyo contenido se haya abordado cualquier asunto relacionado al Reglamento Nacional de Hidrocarburos o sus similares. Este pedido fue presentado a través de un hábeas data contra el Ministerio de Energía y Minas. En los hechos descritos en la resolución de nuestro Tribunal Constitucional, se lee que la entidad se negó a otorgar la información al sostener que se trataría de información protegida por el derecho al secreto e inviolabilidad

de las comunicaciones, además del derecho a la intimidad. Así, en primera instancia, el juzgado ordenó entregar la información contenida en los correos electrónicos, ya que estas comunicaciones tienen naturaleza pública. Ese fue el argumento que formuló el juez. Sin embargo, en segunda instancia, la sala revocó la resolución y declaró improcedente la demanda. El juez de segunda instancia consideró que la información contenida en los correos electrónicos institucionales de los funcionarios públicos son de carácter personal, en virtud a la Directiva 001-2006-MEN-OGP. En esa instancia, la sala desarrolló un argumento interesante: si bien es cierto que puede existir información pública en los correos institucionales, el acto de determinar qué información es de carácter privado y cuál es de naturaleza pública llevaría necesariamente a revisar todos los correos dentro de la cuenta oficial del funcionario público, lo cual desencadenaría inevitablemente en una afectación a su derecho a la privacidad. **¿Cómo resolvió el TC?** Al sentenciar, el TC sostuvo que el demandante requirió información de carácter público y no información personal, pues el pedido en concreto se refirió a información sobre un reglamento. En esa línea, los jueces constitucionales cuestionaron que la entidad no haya motivado su decisión, ya que únicamente concluyeron que se trataba de información protegida por el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y por el derecho a la intimidad. En atención a ello, el TC indica que los correos electrónicos de los funcionarios públicos también podrían contener información privada, en ese caso, la entidad únicamente debería permitir el acceso a la información disponible del documento. Nuevamente, en este apartado, el TC reitera que el argumento que formuló la entidad al negarle la información porque la información vulneraba la intimidad fue incorrecto, ya que el demandante no solicitó información de carácter personal. 23. Empero, no debe descartarse que los correos electrónicos de los funcionarios públicos también puedan contener información privada. En ese caso se debe tener presente el artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que «[e]n caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento». Finalmente, el TC concluyó que la información contenida en el correo electrónico institucional es información pública, por ende, declaró fundada la demanda y ordenó a que la entidad entregue la información al demandante. Es importante recordar que el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, pues garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que pueda robustecerse la opinión pública, libre e informada, que inspiran una sociedad democrática.

### **TEDH (Diario Constitucional):**

- **TEDH: es procedente la extradición a Estados Unidos de un traficante mexicano que fue detenido en Reino Unido.** El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó la demanda deducida por un mexicano detenido en Reino Unido, que alegó que su extradición a Estados Unidos implicaría la imposición de una pena desproporcionada y sin derecho a libertad condicional. El recurrente fue detenido en Reino Unido a petición de las autoridades norteamericanas, por un delito de tráfico de drogas cometido en territorio estadounidense. Tras ello se dispuso su extradición a este país, en el que arriesga cadena perpetua. Recurrió contra esta decisión en sede judicial alegando que “(...) contraviene el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que, de materializarse, existía un riesgo real de que si era condenado por los delitos imputados, recibiría una pena “irreductible” de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”. Su pretensión fue rechazada en todas las instancias nacionales. El Tribunal Supremo británico fundó su decisión en que “(...) cualquier cadena perpetua impuesta al actor podría reducirse, ya que el sistema judicial estadounidense contempla 2 vías para lograr este cometido: liberación por compasión y clemencia ejecutiva”. A raíz de estos fallos adversos demandó al Reino Unido ante el TEDH con el fin de evitar su extradición. En su análisis de fondo, el Tribunal observa que “(...) en el contexto de la extradición, donde la persona aún no ha sido condenada, se requiere una evaluación de riesgos compleja. Exigir a un Estado contratante que analice la ley y la práctica pertinentes de un tercer Estado con miras a evaluar su grado de cumplimiento de estas garantías procesales puede resultar excesivamente difícil para las autoridades nacionales que deciden sobre solicitudes de extradición”. Agrega que “(...) corresponde al demandante demostrar que existe un riesgo real de que sea condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El Estado requerido debe asegurarse, antes de autorizar la extradición, de que existe un mecanismo de revisión de la pena en el Estado requirente. El informe de 2015 de la Comisión de Sentencias de EE. UU., “Cadena perpetua en el sistema federal”, indicó que se habían impuesto cadenas perpetuas en menos de un tercio de todos los casos de tráfico de drogas en 2013” Comprueba que “(...) las directrices sobre tráfico de drogas consideran específicamente una pena de cadena perpetua para los casos en que el uso de drogas cause la muerte o lesiones corporales graves a la víctima y el acusado hubiera sido condenado previamente por un delito de esta naturaleza. También

se puede imponer una sentencia de cadena perpetua en estos casos cuando existe tráfico de grandes cantidades de drogas”. Advierte que “(...) el Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó información sobre los cómplices del actor cuyas sentencias oscilaron entre siete y 20 años de prisión. Los dos que habían recibido las sentencias más altas habían sido acusados de los mismos cargos de importación de drogas y conspiración que el actor. Además, señaló que si este se declara culpable o fuera declarado culpable, sería sentenciado por el mismo juez que condenó a sus cómplices. Este tendría que evitar disparidades de sentencia injustificadas entre acusados con antecedentes similares”. En definitiva, el Tribunal concluye que “(...) si bien no es posible determinar la sentencia que el actor recibiría si fuera declarado culpable en Estados Unidos, sí tendría la oportunidad de ofrecer evidencia sobre cualquier factor atenuante, y el juez estaría obligado a tomar en cuenta las sentencias dictadas en casos análogos. También tendría derecho a apelar contra cualquier fallo impuesto”. En mérito de lo expuesto, el Tribunal resolvió desestimar la demanda por considerar que la extradición no vulneraría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra la prohibición de la tortura y tratos inhumanos.

### **Unión Europea (TJUE):**

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-211/20 P | Comisión/Valencia Club de Fútbol. Decisión relativa a una ayuda de Estado otorgada por España al Valencia CF anulada por el Tribunal General: el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación de la Comisión Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal General no impuso a la Comisión una carga de la prueba excesiva y se limitó a declarar que la Comisión no había satisfecho las exigencias que ella misma se había impuesto mediante la adopción de la Comunicación sobre las garantías.*** El 5 de noviembre de 2009, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la institución financiera de la Generalitat Valenciana, otorgó a la Fundación Valencia, organización vinculada al Valencia CF, club de fútbol profesional español, un aval para un préstamo bancario de 75 millones de euros, mediante el cual dicha Fundación adquirió el 70,6 % de las acciones del Valencia CF. El 10 de noviembre de 2010, el IVF incrementó su aval en favor de la Fundación Valencia en 6 millones de euros para permitir un aumento por el mismo importe del préstamo, con el fin de cubrir el pago del principal, los intereses y los gastos vencidos derivados del impago a 26 de agosto de 2010 de los intereses del préstamo avalado. Mediante Decisión de 4 de julio de 2016, 1 la Comisión declaró que estas medidas, entre otras, constituían ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado interior y, en consecuencia, ordenó su recuperación. Posteriormente, el Valencia CF interpuso un recurso de anulación de dicha Decisión ante el Tribunal General. Mediante sentencia de 12 de marzo de 2020, el Tribunal General anuló dicha Decisión en la medida en que se refería al Valencia CF y decidió que la Comisión había cometido diversos errores manifiestos de apreciación en relación con el aval concedido por el IVF y el incremento del aval decidido en 2010. Mediante su recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General. En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invoca un motivo único, basado en la interpretación errónea del concepto de «ventaja económica» con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1. En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia desestima por infundado ese motivo único y, en consecuencia, el propio recurso de casación. En primer lugar, el Tribunal de Justicia subraya que la Comunicación sobre las garantías establece una jerarquía entre los tres métodos previstos en ella para constatar y cuantificar el elemento de ayuda de una medida. Recuerda que, en virtud de dicha Comunicación, corresponde a la Comisión comprobar si «la asunción de riesgos» se compensa «con una prima adecuada sobre el importe garantizado», dado que, cuando «el precio pagado por la garantía es como mínimo tan elevado como la correspondiente referencia para la prima de la garantía que pueda encontrarse en los mercados financieros, la garantía no incluye ayuda». En consecuencia, la Comisión se ha impuesto la obligación de comprobar, primero, si existe una prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros. Seguidamente, de no existir tal prima, ha precisado en la citada Comunicación que «el coste financiero total del préstamo garantizado, incluidos los tipos de interés del préstamo y la prima de garantía, deberá compararse con el precio de mercado de un préstamo similar no garantizado». Por último, si no existe tal prima ni precio de mercado de un préstamo similar no garantizado, esta misma Comunicación permite a la Comisión recurrir, con el acuerdo del Estado miembro de que se trate, a tipos de referencia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia confirma la sentencia del Tribunal General a tenor de la cual, mediante la adopción de dicha Comunicación, la Comisión se impuso la obligación de comprobar si «existe» una prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros y, en su defecto, si «existe» un precio de mercado de un préstamo similar no avalado, antes de recurrir al tipo de referencia. En segundo lugar, por lo que respecta a la carga de la prueba y al deber de diligencia que incumben a la Comisión en cuanto a la demostración de la existencia de una ventaja, el Tribunal de Justicia recuerda que la carga de la prueba recae sobre la Comisión,

teniendo en cuenta en particular, la información facilitada por el Estado miembro de que se trate, de que no concurren los requisitos de aplicación del principio del operador privado, de modo que la intervención estatal en cuestión confiere una ventaja. Así pues, corresponde a la Comisión llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier dato pertinente en el caso concreto que le permita determinar si es manifiesto que la empresa beneficiaria no habría obtenido facilidades comparables de tal operador privado. El Tribunal de Justicia subraya que la Comisión no puede suponer que una empresa ha disfrutado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado basándose en una mera presunción negativa, fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria, a falta de otros datos que puedan acreditar positivamente la existencia de una ventaja semejante. Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que el juez de la Unión debe examinar la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado en función de la información de que podía disponer la Comisión en la fecha en que adoptó dicha decisión. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia confirma que no hay ningún elemento en la Decisión controvertida que sugiera que la Comisión hubiera verificado si existía una prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros. Además, la Comisión dedujo de su propia apreciación según la cual el Valencia CF estaba en crisis en el momento de la concesión de la garantía no solo que ninguna entidad financiera habría ofrecido un aval a favor de dicho club, sino también que debía excluirse que pudiera existir un préstamo similar no avalado. El Tribunal de Justicia declara, por consiguiente, que la Comisión no demostró ante el Tribunal General que dispusiera de elementos de cierta fiabilidad y coherencia que le hubieran permitido afirmar que únicamente existía un «número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado» que «no proporcionar[ía] una comparación significativa» con el valor de referencia del precio de mercado de un préstamo similar no garantizado. En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia subraya que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el Tribunal General no le impuso, de este modo, obligaciones de diligencia y de carga de la prueba excesivas, sino que se limitó a declarar que no había satisfecho las exigencias que ella misma se había impuesto mediante la adopción de dicha Comunicación. Declara a su vez que el Tribunal General no exigió en absoluto que dicha institución aportara pruebas de la inexistencia de operaciones de naturaleza similar en el mercado, sino que se limitó a señalar que la Comisión no había fundamentado su conclusión ni había hecho uso de la facultad que se le brinda de formular durante el procedimiento administrativo una solicitud específica ante las autoridades españolas o las partes interesadas, con el fin de lograr que se aporten datos pertinentes para la apreciación que ha de hacerse.

- ***Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-163/21 / PACCAR y otros. La exhibición de «pruebas pertinentes», en el sentido del Derecho de la Unión, incluye los documentos que una parte pueda tener que crear mediante la agregación o clasificación de información, conocimientos o datos que estén en su poder.*** No obstante, en aplicación del principio de proporcionalidad, los órganos jurisdiccionales nacionales deben evaluar si son adecuados la carga de trabajo y el coste ocasionados por esa creación de documentos. El objetivo de la Directiva 2014/104 1 es facilitar la aplicación por el sector privado de la normativa de la Unión en materia de competencia, en particular mediante normas sobre la exhibición de pruebas ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el ámbito de litigios relativos a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos a causa de comportamientos contrarios al Derecho de la Unión en materia de competencia. El 19 de julio de 2016, la Comisión declaró que quince fabricantes internacionales de camiones habían participado en infracciones del Derecho de la competencia, al haber celebrado, entre enero de 1997 y enero de 2011, acuerdos sobre los precios e incrementos de los precios. Una serie de adquirentes de camiones afectados por esa Decisión han solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona el acceso a pruebas que están en poder de los fabricantes, con el fin de poder cuantificar el incremento artificial de los precios derivado de dichas infracciones, concretamente mediante el establecimiento de una comparación de los precios recomendados antes, durante y después del período del cártel. Los fabricantes de camiones alegan que esa exhibición de pruebas va más allá de la simple búsqueda y selección de documentos ya existentes o de la mera puesta a disposición de los datos en cuestión. Afirman que supondría plasmar en un nuevo documento, en un soporte digital o en otro soporte, información, conocimientos o datos que están en poder de la parte frente a la que se dirige la solicitud de exhibición de pruebas, lo cual les generaría una carga excesiva y sería contrario al principio de proporcionalidad. En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona pregunta al Tribunal de Justicia si, de conformidad con la Directiva 2014/104, 3 la exhibición de pruebas pertinentes en poder de la parte demandada o de un tercero comprende únicamente los documentos en su poder que ya existan o también aquellos que la parte frente a la que se dirige la solicitud de exhibición de pruebas deba crear ex novo, mediante la agregación o clasificación de información, conocimientos o datos que estén en su poder. Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la exhibición de «pruebas pertinentes» comprende también las pruebas que la parte frente a la que se dirige la solicitud de exhibición

de pruebas deba crear ex novo, mediante la agregación o clasificación de información, conocimientos o datos que estén en su poder, siempre y cuando se respete el deber de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes de limitar la exhibición de pruebas a lo que sea pertinente, proporcionado y necesario, tomando en consideración los intereses legítimos y los derechos fundamentales de esa parte. El Tribunal de Justicia lleva a cabo una interpretación de la norma controvertida. Para empezar, el término «pruebas» recogido en la citada Directiva comprende «todos los tipos de medios de prueba admisibles ante el órgano jurisdiccional nacional que conozca de un asunto, especialmente los documentos y todos los demás objetos que contengan información, independientemente del soporte en que la información esté contenida». De ello se deduce que las pruebas en cuestión no se refieren necesariamente a «documentos» preexistentes. Seguidamente, con la referencia a las pruebas «en [...] poder» de la parte demandada o de un tercero, el legislador de la Unión se limita a constatar un hecho, a saber, la asimetría de información entre la parte demandada o el tercero, por un lado, y la parte demandante, por otro, a quien solo se exige que aporte las pruebas a las que tenga acceso razonablemente y que sean suficientes, a la vista de los escasos datos de que dispone generalmente la parte demandante cuando ejercita una acción indemnizatoria. El Tribunal de Justicia observa que el legislador de la Unión, al adoptar la Directiva 2014/104, partió de la apreciación de que la iniciativa del sector público para combatir los comportamientos contrarios a la competencia no era suficiente a efectos de garantizar el pleno respeto del Derecho de la competencia y de que debía facilitarse al sector privado la posibilidad de contribuir al cumplimiento de ese objetivo. Por consiguiente, precisa el Tribunal de Justicia, se requería el empleo de herramientas que permitieran corregir la asimetría de información entre las partes, ya que, por definición, el autor de la infracción sabe lo que se le ha imputado y conoce las pruebas que han podido servir para demostrar su participación en un comportamiento contrario a la competencia, mientras que el perjudicado por ese comportamiento no dispone de tales pruebas. A este respecto, el hecho de entregar a la parte demandante tan solo documentos preexistentes sin procesar, posiblemente muy numerosos, no respondería más que de manera imperfecta a la solicitud de esta. Además, excluir la facultad de solicitar la exhibición de documentos creados ex novo dificultaría la aplicación por el sector privado de la normativa de la Unión en materia de competencia, lo cual sería contrario al objetivo de la Directiva 2014/104 recordado anteriormente. Para terminar, el Tribunal de Justicia añade que el legislador de la Unión ha establecido un mecanismo de ponderación de los intereses en juego y lo ha sometido a la estricta supervisión de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes. Corresponde a esos órganos jurisdiccionales evaluar si la solicitud de exhibición de pruebas creadas ex novo a partir de elementos de prueba preexistentes en poder de la parte demandada o de un tercero entraña el riesgo, por ejemplo, debido a su carácter excesivo o demasiado general, de imponer una carga desproporcionada a la parte demandada o al tercero afectado, bien sea en lo relativo al coste o a la carga de trabajo que ocasionaría tal solicitud.

### **España (Poder Judicial):**

- **La Audiencia de Valencia condena a seis años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente a dos menores a través de Internet.** La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años y medio de prisión por dos delitos de agresión sexual a menor, uno de ellos continuado, y otros dos delitos de elaboración de material pornográfico, a un hombre que contactó con dos menores valencianas y las forzó a participar en videollamadas de tipo sexual mediante intimidaciones y amenazas. La Sala, que contempla para los cuatro delitos las atenuantes de alteración psíquica y de dilaciones indebidas, impone al penado la obligación de indemnizar con 12.000 euros a cada una de las perjudicadas por los daños psicológicos que sufrieron a consecuencia de los hechos. La sentencia también le inhabilita durante 20 años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores. Los hechos comenzaron en junio de 2018, cuando el procesado, que conoció a la primera de las víctimas al coincidir con ella en un grupo de Whatsapp, comenzó a enviarle fotos de contenido sexual y le reclamó imágenes del mismo tipo. La menor, de 13 años en el momento de los hechos, accedió a ello y le mandó fotos de su cuerpo desnudo o con poca ropa y de sus partes íntimas. A partir de ese momento, el hombre la obligó a practicar sexo a través de videollamadas, tras amenazarla con difundir públicamente sus fotos íntimas. El penado llegó a publicar una de estas fotos junto al teléfono de la menor en una red social. El hombre intentó que la segunda víctima también le mandara fotos de contenido sexual y, cuando esta se negó, le aseguró que era una 'hacker' y le dijo que tendría consecuencias negativas porque podría localizar a sus padres y amigos. La menor se asustó y finalmente accedió a participar en una videollamada de contenido sexual. Siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, la sentencia reconoce que pese a que “no ha existido un contacto directo, sino virtual, entre victimario y víctimas”, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual debido al “marco claramente intimidatorio en el que existen amenazas explícitas e



implícitas" según las cuales si las menores no accedían a las pretensiones del condenado, este publicaría las fotos íntimas a familia y amigos, como finalmente hizo con la primera de las niñas. El 26 de septiembre de 2018, la Guardia Civil realizó la entrada y registro en el domicilio del procesado, en Valdemoro, Madrid, donde localizaron almacenados vídeos similares a los que grabaron las dos menores de la Comunidad Valenciana. Según detalla la resolución, el hombre tiene una discapacidad psicológica leve y el procedimiento ha sufrido dilaciones indebidas, lo que motivan la apreciación de dos atenuantes. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

### **Turquía (20 Minutos):**

- **Prisión para un panadero por decir que comer mucho pan es de tontos.** Un tribunal turco ha decretado este miércoles prisión preventiva para Cihan Kolivar, dirigente del sindicato de panaderos de Estambul, acusado de insultar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y a la nación por afirmar que el pan es un alimento básico de las "sociedades tontas". Kolivar fue detenido el martes tras haber criticado el consumo excesivo de pan en la sociedad turca durante un debate en la televisión Habertürk. "El pan es un alimento básico de las sociedades tontas. Hablo de una cosa científica, no es un decir. Nuestra sociedad se atiborra de pan y lleva 20 años con estos dirigentes", dijo Kolivar, en aparente referencia al tiempo que lleva en el poder el partido islamista AKP y su fundador, el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. Al declarar ante el tribunal, Kolivar rechazó la acusación de "insultar a la nación turca" y dijo que solo había querido ilustrar los perjuicios para salud que supone un consumo excesivo de pan, informa el diario Birgün. La Fiscalía agregó al dossier también varios mensajes de Kolivar en Twitter y presentó acusación de "insultar al presidente", penado con uno a cuatro años de prisión, un delito que en los últimos años ha sido frecuente motivo de juicio y encarcelamiento en Turquía. La abogada del acusado, Bilgi Çiftçi, denunció a la prensa que estos mensajes en Twitter expresaban una crítica general, sin hacer referencia a ninguna persona concreta. Numerosos medios turcos afirman que Turquía es el país con mayor consumo del pan por persona y año del mundo, aunque recuerdan también que un importante volumen de pan se tira a la basura cada día.

### **De nuestros archivos:**

29 de mayo de 2009  
Estados Unidos (*The Oregonian*)


**Resumen:** Arrestan a jurado que abandonó su deber porque le parecía extremadamente aburrido. Grant Faber, jurado de 25 años se aburrió a tal grado que abandonó un juicio. La jueza Gayle Nachtigal ordenó entonces su arresto por desacato a la Corte. La juzgadora comentó que los jurados furtivos pueden ser sentenciados a seis meses de prisión, salvo que cumplan con su deber cívico.

- **Extremely Bored' Juror Walks Out, May Find Jail Time Mind-Numbing, Too.** An "extremely bored" Oregon juror "just couldn't take it" anymore and went AWOL at lunchtime after half a day in Washington County Circuit Court, he told the police officers who tracked him down on May 7. But that excuse didn't go over well with Judge Gayle Nachtigal, who issued an arrest warrant for 25-year-old Grant Faber for contempt of court. Although she wouldn't discuss Faber's case specifically, the judge said runaway jurors can be sentenced to as much as six months in jail. Ordinarily, however, they can escape jail time by simply agreeing to do their civic duty.



**Estaba aburrido**

*Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas*

 [@anaya\\_huertas](https://twitter.com/anaya_huertas)

---

*\* El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.*